

## CÓMO LLEGA EL GOBIERNO A LA TERCERA CUENTA PÚBLICA DE GABRIEL BORIC

- El Gobierno intentará perfilar un cuadro de normalización del país, en circunstancias de que la realidad es completamente disímil al escenario descrito, con criminalidad al alza, la patente vulnerabilidad de nuestras fronteras ante la inmigración irregular, listas de espera en el sector salud que no disminuyen, estancamiento económico y un mercado laboral débil.
- El Presidente probablemente se arrojará logros como el significativo avance de la agenda de seguridad, sin hacerse cargo que esta es una agenda que nunca contó con el respaldo de los líderes que hoy encabezan el Gobierno, incluyéndolo a él mismo. Además, esta batería de proyectos ha logrado ser aprobada, en gran medida, por la actitud de colaboración de la oposición, la que contrasta con el estilo opositor ejercido por el actual oficialismo durante el segundo mandato del Presidente Piñera.
- El discurso puede ser una oportunidad para reconocer errores y enmendar el rumbo o, en cambio, insistir en reformas mal orientadas respecto a las necesidades del país, como la reforma de pensiones del Gobierno, el Pacto Fiscal, la negociación colectiva ramal o la condonación del CAE.

El próximo 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric enfrentará su tercera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. El mandatario llega a esta instancia en un escenario distinto a los anteriores. Por primera vez desde que asumió el Ejecutivo, en las semanas anteriores a su alocución el nivel de aprobación presidencial se situó por debajo de la barrera del 30%. Un tercio del electorado, compuesto mayoritariamente por jóvenes identificados ideológicamente con la izquierda, que se había mostrado inequívocamente fieles a Boric, mostró los primeros signos de agrietamiento.

Si bien el Presidente, de acuerdo a la última medición de Plaza Pública Cadem logró recomponer esta base de apoyo, se vio forzado a realizar gestos para reconectar con algunas demandas históricas de este segmento, como el anuncio de que en septiembre se dará a conocer una “solución” a la cuestión de la deuda estudiantil contraída con el Crédito del Aval del Estado (CAE), que seguramente estará dentro de la batería de anuncios de la próxima Cuenta Pública o el reciente acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Central Única de Trabajadores (CUT) en la que el Gobierno se

compromete al ingreso de un proyecto de ley para consagrar la negociación colectiva multinivel o por rama.

Paralelamente, ha trascendido que el Gobierno buscará perfilar un relato de un país “normalizado”. Una narrativa, discrepante respecto del auténtico momento político, económico y social del país. Por lo demás, el contraste con una presunta normalización es una situación de agitación y crisis social, generada mayoritariamente por el accionar de una entonces oposición obstruccionista y que tuvo un cuestionable compromiso democrático, que propició la agitación social para desestabilizar política y socialmente a un Gobierno legítimamente electo en las urnas, liderada por los mismos rostros que hoy ocupan las más altas posiciones de Gobierno.

Que el propio Presidente Boric haya reconocido que su accionar como oposición no estuvo a la altura, al señalar que *"las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo"*, es la prueba fidedigna de que hubo mezquindad en la forma en que el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros partidos afines concibieron su rol opositor a la segunda administración del Presidente Piñera, lo se refleja en acciones tales como haber impulsado 10 acusaciones constitucionales -dos de ellas en contra del ex Presidente - durante el periodo 2018-2022 o haber exigido la renuncia del ex mandatario, como prematuramente lo hizo el Partido Comunista, cuando recién surgían los primeros indicios de agitación social.

### **CUENTA PÚBLICA: EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN**

La próxima Cuenta Pública será un hito fundamental para visualizar y proyectar cuál será el tono que primará en los últimos dos años de la administración del Presidente Boric. Esta instancia, a su vez, permitirá observar cómo desde el Gobierno se administra la tensión entre moderación y radicalización; la gestión y el testimonio; y el presente y el futuro.

Toda Cuenta Pública intenta trazar un horizonte de sentido, en el que probablemente el Presidente insista en rescatar algunos elementos centrales de su programa de Gobierno.

Dicho programa se vio desdibujado por las condiciones electorales que alteraron el derrotero de la política nacional tras el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. El Ejecutivo, comprometido con el proyecto de constitución maximalista y refundacional propuesto por la Convención, supeditó la puesta en marcha de su programa a una eventual aprobación de este texto, escenario que evidentemente fracasó, al imponerse la opción Rechazo por un 62%.

Así, los aspectos medulares de su propuesta a los chilenos quedaron desalineados respecto al clima de opinión pública, que dejó de ser funcional a las reformas del Gobierno. A modo de ejemplo, durante esa campaña electoral plebiscitaria, se afianzó la conciencia ciudadana respecto de temáticas como la defensa de las cuentas de ahorro personales en el sistema previsional, que está en las antípodas de la reforma de pensiones que esta administración presentó al Congreso.

Pese a aquello, es altamente probable que, por una natural disposición ideológica de esta generación, el Presidente insista en darle realce a algunas de estas reformas, como la previsional, el denominado Pacto Fiscal o la condonación del CAE, pero incorporando además, por necesidad más que por genuina convicción, ambiciosas propuestas -aunque no por eso deficientes o insuficientes- en materia de seguridad, como el proyecto de reforma al sistema de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza en el control del orden y la seguridad pública (RUF) y el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

El problema, en este sentido, es que el Gobierno no cuenta con mayoría legislativa, no ha sido capaz de alinear a sus propios parlamentarios y tampoco ha mostrado una real apertura a flexibilizar sus posiciones para consensuar modificaciones a estas iniciativas, en aras de lograr acuerdos. De ahí que la ventana de oportunidad de esta administración para aprobar sus proyectos de ley en el Congreso sea cada vez más estrecha y, por ende, todo anuncio en esta dirección debiera leerse más como una señal discursiva que un destino real de política pública.

Otro camino que el Presidente podría explorar es mejorar la gestión, aspecto fundamental para dar respuesta a problemas concretos de la ciudadanía, como forma de avanzar en el cumplimiento de metas del Gobierno. Sin embargo, ello sería poco creíble dadas las objetivas carencias a nivel de gestión del Ejecutivo que se reflejan en las listas de espera en el sistema de salud estatal, la ausencia de matrículas en la educación escolar, el déficit habitacional, la apremiante proliferación de campamentos y la lenta reconstrucción de zonas damnificadas por el mega incendio en Viña del Mar, entre otros.

Frente a esta disyuntiva, el Presidente probablemente intente hacer un rescate de hitos legislativos y de gestión que buscará incorporar como parte de su legado, en especial aquellos relativos a la agenda de seguridad, donde si bien se han logrado aprobar una alta cantidad de iniciativas, la mayor parte de estas corresponden a mensajes presidenciales de la anterior administración y que contaron con una férrea oposición de los actuales cuadros gubernamentales cuando desempeñaban funciones como parlamentarios.

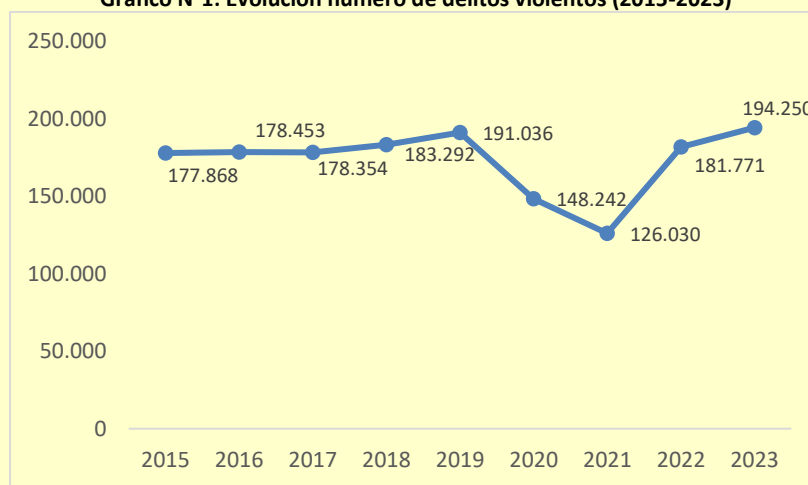
Se añade a lo anterior que esta nutrida agenda denominada “fast track” de seguridad ha logrado ser despachada porque son los partidos de Chile Vamos, Republicanos y grupos de centro como Demócratas y Amarillos quienes han concurrido con sus votos, a pesar de la oposición del bloque más izquierdista del oficialismo. En ese sentido, la conducta de los partidos de oposición ha estado muy lejos del obstruccionismo del que le acusa el Gobierno.

### UN PAÍS MÁS INSEGURO

Otra línea potencial del discurso pasará por dar realce a la cuantiosa inversión de recursos en materia de seguridad, pese a que ésta ha contado con algunos déficits a nivel de ejecución presupuestaria. Lo cierto es que los recursos son condición necesaria, pero no suficiente, para abordar la severa crisis en esta materia. Al respecto, basta ver las cifras: durante estos últimos dos años, Chile ha alcanzado el número más alto de homicidios y delitos violentos. Y durante esta administración se ha alcanzado la triste cifra de 10 carabineros asesinados mientras desempeñaban sus funciones.

#### DURANTE ESTOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, CHILE HA ALCANZADO EL NÚMERO MÁS ALTO DE HOMICIDIOS Y DELITOS VIOLENTOS

Gráfico N°1: Evolución número de delitos violentos (2015-2023)



Fuente: Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros.

### UNA ECONOMÍA ESTANCADA

En el ámbito económico, la situación está lejos de ser ideal y hay poco en materia de gestión gubernamental por destacar con el menor crecimiento en los primeros dos años desde el retorno de la democracia. En términos del mercado del trabajo, las

principales leyes que el Gobierno ha aprobado durante su mandato son la reducción de la jornada laboral a 40 horas -ya en implementación- y el aumento del sueldo mínimo a \$500 mil -que comienza en julio-. Ambos cambios generarán un alza en los costos de contratación de trabajadores formales, haciendo aún más difícil la recuperación de las tasas de ocupación que aún están por debajo de las que presentaba el país antes de la pandemia. A su vez, al analizar diferentes indicadores del mercado del trabajo, vemos que ha habido un descenso en las ofertas laborales, un aumento en los despidos y un menor dinamismo en la creación de empleos formales. Todo ello ha redundado en un mayor porcentaje de personas que buscan, pero no encuentran trabajo. Así, los supuestos beneficios aprobados por el Presidente Boric llegan a menos personas y harán más difícil que las familias puedan progresar en base a su propio esfuerzo al no poder emplearse.

Frente a este contexto, es contraproducente el anuncio del ingreso de un proyecto de ley para establecer una negociación colectiva multinivel, que desconoce la especificidad de cada empresa al establecer condiciones por rama económica que pueden ser difíciles de cumplir para industrias de menor tamaño, viéndose en último término perjudicados los trabajadores de éstas, a la vez de que puede ser un catalizador de mayores niveles de conflictividad laboral.

### **SALUD ESTATAL, UN PACIENTE QUE NO MEJORA**

En tanto, otro ámbito que el Presidente podría destacar como parte de su legado será el fin del copago para los tramos C y D de FONASA, que actualmente pagaban un 10% y 20% del costo, respectivamente, de las prestaciones que recibían en los hospitales estatales. Esto comenzó a operar en septiembre de 2022 y, si bien parece un gran beneficio para 4 de cada 10 afiliados al seguro estatal que pertenecen a dichos tramos, ignora que el problema para quienes se atienden en hospitales estatales, más que el cobro, es la disponibilidad de la atención.

De hecho, a fines del año pasado, 68 mil chilenos esperaban por una prestación médica cuya oportunidad se suponía garantizada gracias al GES. En el caso de las intervenciones quirúrgicas que no son parte de dicho plan, las listas de espera superan las 295 mil personas. Y en las consultas médicas, las listas acumulan más de 2 millones de personas. Así, las listas de espera subieron en un 9% entre 2022 y 2023. No es de extrañar entonces que, pese a los copagos requeridos, el año pasado se hayan realizado 74 millones de prestaciones en la modalidad de libre elección (que permite a los afiliados de FONASA atenderse en el sector privado), evitando así esperas excesivas.

## CONCLUSIONES

El próximo 1 de junio el Presidente tiene una oportunidad para enmendar -a lo menos discursivamente- el rumbo o persistir en un camino que lejos de normalizar el país, ha provocado severos perjuicios en áreas fundamentales como seguridad, la economía, el mercado laboral y el sistema de salud.

Al tratarse ya de su tercera cuenta pública, más que tiempo de anuncios, los que parecen destinados a transformarse en meros gestos testimoniales, parece una ocasión propicia para realizar un balance de su gestión que, a todas luces, ha sido negativa.

El Presidente, necesariamente deberá lidiar, tanto en su alocución, como en lo que queda de mandato, con signos de una incipiente oposición interna a su bloque de respaldo político, debiendo poner énfasis en áreas de gestión que no son propias de su línea de pensamiento -como la agenda de seguridad- y relevando aspectos de políticas implementadas durante su administración que, más allá de lo simbólico, han tenido un escaso impacto en la situación económica y social del país.